

El mito de la Constitución histórica de España como clave de interpretación liberal de la Independencia de América

POR **ARMANDO ZEROLO DURÁN** (*)

*Y es más fácil, oh España, en muchos modos,
que lo que a todos les quitaste sola
te puedan a ti sola quitar todos.*
Francisco de Quevedo.

I. Introducción

La independencia de América puso en cuestión los grandes modelos políticos e ideológicos del siglo XIX. Prácticamente todos los contendientes manejaron los mismos argumentos, ya fuese a favor o en contra de la monarquía. Dominaban dos líneas argumentales. La de la soberanía popular tal y como se había desarrollado por los revolucionarios franceses, o la del absolutismo monárquico, como se había implantado en España durante el siglo XVIII. La incomprensión de una tradición política española nacida en el ocaso de la Edad Media, conocida como “monarquía hispánica”, y la asimilación de un modelo político afrancesado, favorecieron la fragmentación del territorio nacional.

La historiografía decimonónica, impregnada de ideales modernos típicamente nacionalistas, no pudo comprender que América se formó como el precipitado histórico de diversas culturas que lograron convivir y enriquecerse en un espacio concreto. El contraste entre los modos de expansión español, y francés e inglés, es grande debido a su mayor o menor capacidad para integrar la diferencia dentro de la unidad. Los modelos, tanto francés como inglés, tienden a ser excluyentes. El objeto de este ensayo es presentar una tercera vía argumental utilizada por algunos liberales, como Jovenallos, más acorde con la tradición histórica de España, y que podría haber supuesto una alternativa interesante al absolutismo fernandino.

(*) Lic. en Derecho y Ciencias Políticas. Doctor en Derecho. Especialista en pensamiento político contemporáneo. Prof. de la Universidad CEU-San Pablo, Madrid.

El gran movimiento *ad extra* de España fue promovido por la monarquía de los Reyes Católicos, por Carlos V y Felipe II, mientras que la casa francesa de los Borbones se vio obligada a “modernizar” el Estado y lo hizo según patrones centralistas y nacionalistas extraños a una tradición española difícil de comprender para una época tendente al racionalismo político.

Se puede ver un cambio de políticas regionales en las diferentes terminologías con las que se designó a los diferentes territorios a lo largo del tiempo: reino, colonia y provincia. Cuando se hablaba de reinos se entendía que los territorios de ultramar eran uno más, en la misma condición y con el mismo régimen político que cualquier otro del continente, como Nápoles, Navarra, Castilla o el Virreinato de Perú. Era una pluralidad de reinos bajo un mismo rey y emperador, Carlos V. Sin embargo, cuando se empieza a hablar de colonias se da un giro de 180 grados en la política española, pues se readapta la administración del Estado hacia un modelo centralista que regula con el mismo régimen legal todo el territorio. Hablar de “provincias” para referirse a los territorios de ultramar es un intento, utópico o no, de readaptar el modelo de Estado moderno a las necesidades de la época partiendo, en lo posible, de una tradición típicamente española.

Las Cortes de Cádiz, durante el período de desgobierno de la Guerra de la Independencia, fueron una oportunidad histórica para reformar el anquilosado sistema administrativo español y repensar la relación que tenía la metrópoli con los territorios americanos. Políticos como Gaspar Melchor de Jovellanos lo intentaron con los instrumentos de que disponían en su momento. Comprendieron que los españoles de América tenían los mismos derechos que los españoles del continente europeo y que ello debía tener un reflejo político. El primer paso debía ser concederles representación en la Junta Central y en las Cortes Constituyentes, lo cual no significaba admitir el proceso de independencia.

La influencia interesada de Francia e Inglaterra, comprometidos en deshacer los restos del imperio español, la corrupción de la administración española y la fuerza ejercida por el absolutismo fernandino que aumentó la tensión y la incompreensión entre los distintos territorios, precipitó la independencia de los territorios de ultramar y la reacción en cadena que terminaría en 1898, y con las secuelas nacionalistas que se sienten todavía con intensidad en los primeros lustros del siglo XXI en España.

II. El mito de la Constitución histórica de España

Los liberales conservadores, cuyo exponente más destacado fue Gaspar Melchor de Jovellanos, reivindicaron la forma política española nacida de la historia y re-

chazaron tanto las formas absolutistas francesas como los ideales revolucionarios soberanistas. La idea de una unidad española nacida de la Reconquista, y las formas políticas que surgieron de esta historia tan particular, operaron como mito en torno al problema de la independencia de los territorios americanos. A continuación, exponemos el ideario tal y como aquellos liberales conservadores pudieron llegar a asimilarlo para aplicarlo al contexto histórico determinado.

II.1. La unidad goda

España adoptó, durante la Edad Media y debido a sus particularidades históricas, una forma política muy original y diferente a las del resto de países europeos. Esta forma le permitió tener la flexibilidad y operatividad necesarias para acometer la tarea de integrar gigantescos territorios a la Corona sin alterar su naturaleza. Francia o Inglaterra, en el siglo XV, hubiesen sido incapaces de llevar a cabo tal empresa, como España fue incapaz de sostenerla cuatrocientos años después frente al impulso renovado de los ingleses.

La historia nos permite ver movimientos de sístole y de diástole según diversas circunstancias normalmente difíciles de interpretar para sus protagonistas. España es un caso paradigmático de ello, y en apenas cuatro siglos se produce un fabuloso movimiento *ad extra* abrumador y, consecutivamente, otro *ad intra* igualmente sin freno. Desde el final de la Reconquista hasta el Imperio de Felipe II hay un impulso no necesariamente deseado de extensión y de crecimiento que arrastra a España hacia un destino incontrolado, mientras que la época de los “Austrias menores” empezará a ver una implosión, un repliegue *ad intra* igualmente sin remedio aparente hasta, sin exageraciones, nuestros días.

La conciencia de una unidad histórica de España se remonta lejos en el tiempo, y ya autores como Tito Livio o el africano Foro hablaban de *Hispania universa* para referirse a cierta unidad preexistente a la romanización del territorio peninsular. Así, Menéndez Pidal señala que antes de la disolución del Imperio España:

“(…) aparece ya con un valor nacional muy preciso en la primera Historia Universal que el cristianismo concibe, la de Paulo Osorio. Este galai-co, discípulo de San Agustín, se muestra poseído de un particular espíritu patrio. España para él es todavía una provincia del Imperio dentro del cual la Providencia ha unificado el orbe, mas, a pesar de eso, la provincia se yergue altanera en oposición a la urbe, alegando ya un destino histórico propio, dentro del imperio, reclamando para sus guerras habidas con Roma un valor ejemplar de lealtad a las leyes eternas de justicia, más alto que el mostrado por la metrópoli vencedora, y señalando a los godos en España un papel restaurador de la providencial unidad del orbe cristiano” (Menéndez Pidal, 1947: 54).

Es necesario recordar cómo se fue formando la unidad política de España, aunque sea brevemente, para intentar comprender la forma política particular de la monarquía hispánica, tan distinta de otras formas europeas, y muy alejada de los nacionalismos decimonónicos que dieron lugar a las incomprensiones y ulteriores independencias de los territorios de ultramar.

Los visigodos, como vaticinara Osorio, cumplieron “con un destino histórico patrio”, aunque no llegaron, sin embargo, a cumplir un papel tan definitivo en la labor de unidad de la Península. Realizaron una unidad política y, tras la conversión de Recaredo, una unidad religiosa. San Isidoro, uno de los más importantes escritores visigodos, en su *De laude Hispanie*, hablaba así de España:

“De todas las tierras que se extienden desde el mar de Occidente hasta la India tú eres la más hermosa. ¡Oh sacra y venturosa España, madre de príncipes y de pueblos! (...) Tú eres la gloria y el ornamento del mundo, la porción más ilustre de la Tierra (...). Tú, riquísima en frutas, exuberante de racimos, copiosa de mieses, te revistes de espigas, te sombras de olivos, te adornas de vides. Están llenos de flores tus campos, de frondosidad tus montes, de peces tus ríos (...).”

La descripción de España como “sacra y venturosa” denota ya en la época una conciencia de unidad de territorio y de destino, lo cual no es de extrañar para un pueblo culto como el visigodo que tenía un concepto muy desarrollado de la idea heredada de Roma de *res publica*. No obstante, la historia es contraria a idealizaciones románticas y la crudeza de los hechos acaba con cualquier intento de interpretación lineal. La comunidad política apenas iniciada pronto es debilitada y fragmentada por las luchas internas y por la invasión del Islam. Como ha señalado Pirenne (2012), la invasión supone una ruptura en la continuidad histórica que había habido hasta entonces, estableciendo un lapso temporal y cultural en toda Europa y, en particular, en España. Lo que vendrá después será, por tanto, nuevo y original. Sin embargo, y esto es importante recordarlo, el reino visigodo actuará como motor y modelo de la reconquista y, según Díez del Corral (1961: 3241), “la idea de la unidad goda es una referencia que sirve para medir tanto la ruina de la España medieval como la hipertrofia de la España moderna”.

Sin entrar en la polémica idea de “cruzada” (711-1492) ni en la irresoluta disputa entre Américo Castro y Sánchez Albornoz, solo pretendemos señalar la importancia que tuvo la imagen del reino visigodo para el avance de la reconquista y la construcción particular de una organización político-administrativa muy original fruto de unas circunstancias de guerra y precariedad. No cabe duda de que, si España hubiese disfrutado de la estabilidad política de países como Francia, la construcción de la monarquía hubiese adquirido un cariz muy distinto. Pero el hecho de estar en guerra permanente durante siglos, con fronteras muy inestables como

la del Ebro, y más tarde la del Duero, provocó la creación de la forma política de “reino” como una unidad fuerte y centralizada.

Durante el siglo XIV reinos y condados luchaban y se ensamblaban, produciéndose una incorporación de grupos sociales, reinos, formas de vida colectiva y creencias con una velocidad y eficacia muy llamativas. España, en este sentido de un poder fuerte y centralizado que dirige una empresa territorial, es la precursora del Estado moderno, y ve surgir inopinadamente formas políticas que ya no son medievales, que asientan sus raíces en la Edad Media, que anticipan la modernidad y que propiciarán la unión con los nuevos territorios descubiertos. Así, como escribe Díez del Corral, “la flexibilidad y la tendencia a la expansión que están presentes en la misma naturaleza de este conglomerado de reinos ibéricos le permiten ampliarse a nuevos territorios, aun cuando estos se hallen fuera de la península. Es así que la propia infranacionalidad política medieval nos sirve para explicar la supranacionalidad moderna” (1961: 3239).

II.2. *Plus ultra*

El mundo antiguo había establecido sus límites en las columnas de Hércules, casualmente ubicadas al sur de la península. El *non plus ultra* era un mandato ético y la idea de límite gobernaba el comportamiento moral frente a la desmesura, que era el principio de corrupción de las almas. Es significativo que Carlos V estableciera como divisa el *plus ultra*. Más allá de los límites conocidos, apertura a lo extraño, misión y tarea política en un sentido radicalmente nuevo, cristiano en su esencia y moderno en su forma. Hay que entender la monarquía hispánica desde este prisma, desde el “más allá”, porque será el carácter misionero, expansivo y universal lo que caracterice al Imperio y, definitivamente, lo diferencie de otros impulsos colonizadores posteriores.

La mentalidad de la época quedó perfectamente retratada por el gran poeta y hombre político que fue Quevedo, quien en su célebre poema “Un godo, que una cueva en la montaña”, vinculó la cueva asturiana, último refugio de la monarquía goda, con América, en una línea clara sin solución de continuidad. Los dos últimos versos impresionaron la conciencia de un pueblo, anticipando lo que ya estaba en ciernes:

“Un godo, que una cueva en la montaña
guardó, pudo cobrar las dos Castillas;
del Betis y Genil las dos orillas,
los herederos de tan grande hazaña.
A Navarra te dio justicia y maña,
y un casamiento, en Aragón, las sillas

con que a Sicilia y Nápoles humillas
y a quien Milán espléndida acompaña.
Muerte infeliz en Portugal arbola
tus castillos. Colón pasó los godos
al ignorado cerco de esta bola.
Y es más fácil, ¡oh España, en muchos modos,
que lo que a todos les quistaste sola
te puedan a ti sola quitar todos”

La forma de la monarquía hispánica, imperial en su esencia, estaba impregnada de este *plus ultra*, de la idea de un destino político y religioso que dirigía la acción hacia una forma política universal e imperial, no imperialista. Hoy en día es difícil comprender esta mentalidad, porque el nacionalismo determina el modo de pensar lo político, y resulta problemático entender la política sin fronteras nacionales, banderas y territorios, con un carácter propio y separado de la religión. Ayuda a comprender la mentalidad imperial la analogía con la forma de la Iglesia católica (Schmitt, 2011), para la que no son admisibles las iglesias nacionales y para la que el carácter católico, es decir, universal, es esencial. El imperio, por analogía, en el sentido estricto de la palabra, se concebía del mismo modo, integrando las distintas particularidades en una unidad comprensiva supranacional.

El nacionalismo no es integrador, es excluyente, y obedece a una idea esencialista de destino. Historicismo y nacionalismo van de la mano hacia un punto fijo y determinado de la historia. Por el contrario, en la historia de España, como en realidad así sucede en la historia universal, el acontecimiento entendido como lo imprevisto marca el ritmo impredecible de la historia. Roma, el Islam, Colón, Carlos V, etc., son acontecimientos que no forman parte de una sucesión de notas, sino que son el contrapunto que da sentido a la melodía. España estaba volcada al Mediterráneo en el siglo XV, precisamente en el momento en que el acontecimiento moderno más relevante hizo saltar por los aires la política de la monarquía y modificó sustancialmente el destino de la historia española. Casi como por azar, la España que miraba al mar interior se volcó al Atlántico, cambiando para siempre su destino. El hecho de ir integrando estos acontecimientos históricos es lo que ha marcado el carácter nacional del pueblo español, que es fruto de una amalgama de culturas y realidades históricas, y no el resultado de la puesta en práctica de un plan perfectamente establecido. España no construyó en América lo que los ingleses en la India o en el norte del continente americano. España se hizo americana como América se hizo española.

Es necesario subrayar este carácter relacional de la política española que, en definitiva, como sostiene Remi Brague (1995) en *La vía romana*, es el carácter de Europa, para comprender el *plus ultra* de la monarquía hispánica. Según Brague, lo

que hizo a Europa ser lo que fue es su capacidad de hacer propio lo que era ajeno, de asumir los dioses griegos, el pensamiento extranjero, las culturas extrañas, para gestarlas en su seno y recibir de ellas su impulso. La imagen es parecida a la de la madre que acoge en su seno lo que viene de fuera para gestar una nueva criatura distinta de sus progenitores. Eso era Europa y eso fue España. Cosa muy distinta de la Europa decimonónica, egocéntrica y colonizadora, que ha provocado una lectura equivocada de la historia según la cual América no es sino el resultado de la expansión europea, como si se tratase de una inmensa marea que inundó las riberas del otro mundo.

Solo Castilla, por su concepción tan particular de la nacionalidad fraguada durante la reconquista, y siempre con la memoria del reino visigodo, que permitió la conciencia clara de una naturaleza abierta y relacional, pudo emprender lo que ninguna república italiana o flamenca hubiese podido hacer en la misma época.

Castilla, según Menéndez Pelayo (2007), fue el pulmón del Imperio, no solo por su vigor económico, sino sobre todo por su construcción política. Para Marcelino Menéndez Pelayo, Fernando e Isabel fijaron la constitución histórica de España, y así lo expresa en un célebre pasaje que merece la pena citarse *in extenso*, llevando a cabo con la energía de los grandes hombres políticos, esta serie de tareas:

“La reforma de juros y mercedes de 1480, verdadera reconquista del patrimonio real, torpemente enajenado por don Enrique IV; la incorporación de los maestrazgos a la corona, con lo cual vino a ser imposible la existencia de un Estado dentro de otro Estado; la prohibición de levantar nuevas fortalezas, y allanamiento de muchas de las antiguas, con cuyos muros la tiranía señorial se derrumbó para siempre; la centralización del poder mediante los Consejos; la nueva planta dada a los tribunales, facilitando la más pronta y expedita administración de justicia; el predominio cada día creciente de los letrados; la anulación de la aristocracia como elemento político, no como fuerza social; las tentativas de codificación del doctor Montalvo y de Lorenzo Galíndez, prematuras sin duda, pero no infecundas; la directa y eficaz intervención de la corona en el régimen municipal, hondamente degenerado por la anarquía del siglo anterior; el nuevo sistema económico que se desarrolló en innumerables pragmáticas, las cuales, si pecan de prohibitivas con exceso, porque quizás lo exigía entonces la defensa del trabajo nacional, son dignas de alabanzas en lo que toca a la simplificación de monedas, pesos y medidas, al desarrollo de la industria naval y el comercio interior, al fomento de la ganadería; la transformación de las bandas guerreras de la Edad Media en ejército moderno, con su invencible nervio, la infantería, que por siglo y medio había de dar la ley a Europa; y en otro orden de cosas, muy diverso, la cruenta

depuración de la raza mediante el formidable instrumento del Santo Oficio y el edicto de 1492; la reforma de los regulares claustrales y observantes, que, realizada a tiempo y con paso firme, nos ahorró la revolución religiosa del siglo XVI (...) son aspectos diversos de un mismo pensamiento político, cuya unidad y grandeza son visibles para todo el que, libre de las pasiones actuales, contemple desinteresadamente el espectáculo de la historia” (Menéndez Pelayo, 2007: 94-95).

Solo los castellanos estaban preparados para conquistar y explotar América porque su forma de ir ampliando el territorio les había enseñado cómo hacerlo, en esa forma tan particular de unión de reinos.

III. Las políticas centralizadoras: preámbulos de la independencia

La política española del siglo XVII no fue ajena a la modernidad y los nuevos modos de organización política. Las guerras contra el protestantismo y el acoso de la católica Francia pusieron a España y, en particular, al valido de Felipe IV, el Conde-Duque de Olivares, ante la tesitura de reorganizar la política nacional. La decisión, ciertamente ajena a la tradición de la monarquía hispánica, fue la de apostar por la centralización a imagen de los países rivales con los que parecía haberse mimetizado, pensando que la fuerza le vendría de la concentración del poder. La respuesta que esto provocó es conocida y el levantamiento en armas de los reinos peninsulares puso en evidencia que el Estado moderno naciente no tenía ni la fuerza ni la organización para comportarse como la vecina Francia. Este hecho es uno de los más importantes para comprender el resto de acontecimientos que se produjeron entre Castilla y los demás reinos, y entre la península y los territorios de ultramar.

En 1635, escribe Salvador de Madariaga (1959: 432), se produce un “brusco colapso político que reduce a ruinas la estructura más vasta y más sólida que había conocido la historia, y no respeta siquiera el mismo corazón del imperio”. Este fracaso manifiesta la inadecuación de la forma histórica española de la monarquía hispánica con el Estado moderno descrito por Juan Bodino en *Los seis libros de la república*. La soberanía legislativa, fuente del nuevo poder absoluto de la monarquía francesa, legítima según la teoría protestante del derecho divino de los reyes, y que concentraba en la persona del rey la *potentia ordinata* y la *potentia absoluta*, era posible allí donde la corona se podía fijar como un único punto del que irradiaban los demás poderes (Rey Sol). Pero la historia de España era muy distinta, la tradición del reino de Castilla, véase el testamento de Isabel “la Católica”, repugnaba estos ideales, y fácticamente era imposible por la debilidad de las instituciones, por la tradición de la independencia del pueblo y por la disgregación administra-

tiva de la corona. Con fiel reflejo en América, esta concepción de la organización del poder fue el principio de la obra colonizadora española, respetando la vida indígena: “El resultado fue todo un continente –escribe Madariaga– asimilado efectivamente a la civilización y vida europeas sin sacrificar al indígena ni dejarlo fuera de este proceso, en cuanto dependía de los descubridores; absorción a Europa que permitió a las formas europeas pasar a pueblos tan lejanos de espíritu como los aztecas de Méjico, los incas del Perú y hasta los tagalos de las Filipinas (únicos asiáticos europeizados)” (Madariaga, 1959: 432).

El hecho es que la Guerra de Sucesión (1701-1713) fue la ocasión de observar el sutil equilibrio sobre el que se había construido la monarquía hispánica, y los Borbones, aun reconociéndoles importantes logros en la organización del Estado, no pudieron conservar. La reacción, de tradición muy francesa, fue intentar concentrar el poder construyendo un sistema político unitario sirviéndose de la centralización administrativa. La tradición castellana, en palabras de Tocqueville, proponía una centralización del gobierno y una fuerte descentralización de la administración. La tradición francesa, como explica en *El antiguo régimen y la revolución*, concentraba ambos poderes, el gobierno y la administración. Esto explica por qué América fue perdiendo cada vez más competencias, por qué fueron desapareciendo los poderes de los reinos y por qué, contra las indicaciones de Isabel, se fueron aboliendo paulatinamente fueros y privilegios.

III.1. Fernando VII: la opción absolutista

Para comprender la relación de la metrópoli con los territorios de ultramar es necesario entender que un nutrido grupo de liberales “doceañistas” pensaban que la tradición política afrancesada era ajena e inapropiada para el sistema político español. Lo eran las teorías del derecho divino de los reyes, para las que el poder era dado directamente por Dios al monarca, y contrarias a la tradición del poder heredada ya desde San Isidoro, según la cual el poder se lo daba Dios al pueblo y este, diferidamente, al monarca. Lo era también la concepción centralista del gobierno y lo era de igual modo el carácter colonizador de los monarcas franceses. Y así, como señala Martiré, esas medidas generaron un descontento que “se convirtió en factor determinante para que las inquietudes y protestas, al encontrar la oportunidad favorable, hicieran estallar en pedazos los lazos de la dependencia entre España y América” (2000: 222).

III.2. Reformas borbónicas del gobierno de las Indias

Hemos visto ya cómo la idea de una constitución histórica operaba como mito en la concepción de la relación que debía de haber entre las Indias y la península,

y esto nos permite saber a qué se referían en sus discursos los liberales conservadores de principios del siglo XIX. Veamos cuáles fueron las principales reformas de la época de los Borbones para poder comprender qué realidades combatían y de dónde surgía su malestar.

A grandes rasgos, y con riesgo de caer en simplificaciones injustas, podemos decir que el absolutismo borbónico fue menos respetuoso con las singularidades populares de las Indias. Los cabildos eran una institución popular en América, las Cortes eran una institución castellana orgánica y descentralizada, y los jesuitas seguían defendiendo usos y costumbres propias de la constitución histórica de España. Los últimos Austrias sumieron a España en la corrupción y la dejadez. Los Borbones intentaron modernizar y agilizar el Estado cambiando todo esto en lo que se tradujo como el tránsito de un gobierno imperial a un gobierno colonial. “El cambio de actitud hacia los dominios de ultramar –explica Martiré– con medidas revitalizadoras de los viejos lazos de dependencia, en especial a partir de Carlos III, hizo que sus habitantes se sintieran nuevamente ‘colonizados’, pasando a ser (...) de reinos a colonias” (2000: 222). Las razones para llevar a cabo estas reformas fueron muchas. Es cierto que los Austrias menores se encontraron con una organización imperial obsoleta y con las arcas del Estado prácticamente vacías, y también lo es que los Borbones se dejaron asesorar y se fijaron en los pujantes Estados modernos que empezaban a hacer sombra a España.

Las principales reformas tendentes a la construcción y reforzamiento del gobierno administrativo fueron construyendo el Imperio según el modelo de Estado moderno influido por las nuevas corrientes de pensamiento racionalista venidas de Inglaterra y Francia, cuyos principales representantes serían Hobbes (Gallego, 2016), Puffendorf, Descartes y Bodino. La imagen de un Estado moderno fuerte, centralizado, perfectamente organizado y con una administración racionalizada devino indiscutible.

El Estado debía organizarse racionalmente eliminando cualquier interferencia que alterase la vía de poder que iba en sentido descendente desde el monarca hasta el pueblo. Había que crear un sistema que favoreciese, como un buen conductor de la electricidad, la transmisión del poder. El monarca tenía que tener facilidad para impulsar la economía, reformar la educación (es muy significativa la reforma que hicieron de la Universidad del Cardenal Cisneros), gobernar las instituciones y manejar la legislación. La tarea de centralización y racionalización sería inmensa.

Los oficios medievales pasaron a ser oficinas. Lo que en la tradición medieval eran tareas encargadas con mucha autonomía y que muchas veces se disfrutaban en propiedad, con la racionalización del Estado pasaron a ser funciones delegadas del ministro responsable en sus funcionarios, que respondían jerárquicamente.

Del mismo modo jerárquico se entendía el territorio, sometido a la soberanía legislativa del monarca, quien previamente habría igualado los derechos de todos los reinos, convirtiéndolos en la práctica en provincias. Así sucedió con Aragón, Cataluña y Valencia, y con los reinos indianos, también convertidos entonces en provincias. Este proceso uniformador y centralizador es de capital importancia para comprender las reacciones independentistas de los territorios ultramarinos y las tesis reformadoras de muchos de los liberales ilustrados de principios del siglo XIX.

La Iglesia también fue fuertemente intervenida y el monarca se situó entre el papa y los clérigos, los derechos que el rey tenía sobre la administración de la Iglesia dejaron de considerarse como concesiones papales en lo que se conoce como regalías, es decir, como derechos inherentes al poder monárquico. La influencia del galicanismo y de las doctrinas anglosajonas es evidente, y este será otro tema que con la crisis de la Guerra de la Independencia generará mucha confusión, pues parte del clero se posicionó a favor del absolutismo, mientras que otra parte lo hizo a favor de las libertades tradicionales y algunos con los liberales afrancesados.

En la línea centralizadora del poder, los tradicionales Consejos, el de Castilla y el de Indias, eran un obstáculo que había que salvar. Suprimirlos bruscamente hubiese supuesto ignorar muchos años de inercia y generar una tensión innecesaria, pero sí fueron disminuyendo paulatinamente sus funciones. Así, por ejemplo, en 1774 se le privó de la potestad de examinar, reconocer y corregir las cuentas de los tribunales, y esta potestad se le atribuyó a la Secretaría del Despacho Universal de Indias.

La Secretaría de Marina e Indias apareció en 1714, inmediatamente después de la Guerra de Sucesión, y se le atribuyó la función de transmitir a América las decisiones del monarca. Ya no era un órgano deliberativo y consultivo, sino una pieza más en la línea de transmisión del poder copiado de Francia. El Consejo de Indias siguió vigente, pero con unas atribuciones muy reducidas limitadas únicamente a la administración de justicia y a la elaboración de informes. La potestad legislativa, una de las más importantes de los Consejos, manifestada a través de la producción de reales cédulas y reales provisiones, quedó reducida al mínimo al aparecer la nueva figura legislativa de la Real Orden. La Real Orden emanaba del ministro unilateralmente y por mandato del monarca, y debía ser cumplida sin mediación de ningún tipo.

El territorio americano se reorganizó, se crearon los virreinos de Nueva Granada y Río de la Plata, se limitaron las competencias de los cabildos de Indias, se reformó la organización de las ciudades y se reestructuró lo relativo a hacienda

con la figura de los intendentes, quizás la más significativa de lo que supuso el intervencionismo y el centralismo para América.

Richelieu y Mazarino instituyeron las intendencias en Francia a finales del siglo XVI constituyendo lo que se conocía como la *longa manus* del rey Luis XIV. Felipe V, asesorado por Francia, las implantó en la península con un éxito notable y se pensó que la figura también podría ser de utilidad en América. La figura del intendente debía ser la extensión de la bonhomía del rey en los lugares a los que él mismo no podía llegar, y sus potestades eran grandes, tales como la administración de justicia, impulsar la economía, la educación y, en definitiva, optimizar el aparato estatal para conseguir la máxima eficiencia. La primera en América se estableció en 1776 en Venezuela y, en el mismo año, con el establecimiento del Virreinato del Río de la Plata, se decidió instalar allí también las intendencias. “Como era frecuente en las iniciativas reformadoras de la Corona –piensa Tulio Halperin– si la creación del virreinato era ante todo una respuesta impostergable a una amenaza urgente, buscaba a la vez contribuir a una más ambiciosa transformación global del sistema colonial” (Halperin, 2000: 250). El virrey debía compartir su poder con el del intendente y quizás sea esta convivencia entre el virrey y el intendente la mejor figura de la convivencia entre dos sistemas completamente distintos condenados a no entenderse. El virrey como institución de la época imperial, con un poder descentralizado y propio; y el intendente, como institución típicamente colonial, con un poder delegado y jerarquizado administrativamente. La convivencia de ambas fue el signo clarividente de un cambio de época marcado por tensiones irresolubles.

IV. La constitución histórica de España: la opción liberal de Jovellanos

La Guerra de la Independencia y el desgobierno reinante a consecuencia de ella, generó paradójicamente una situación propicia para crear una forma de gobierno alternativa al absolutismo de influencia francesa y quizás compatible con los territorios de ultramar. Algunos liberales “doceañistas” ilustrados, inspirados por la tradición histórica castellana y del Imperio, propusieron una serie de reformas acordes con las tendencias constitucionalistas modernas con el fin de conservar la unidad del territorio nacional y respetar las nuevas libertades según las viejas maneras reformadas. En este sentido, Jovellanos, un liberal conservador, con su propuesta de Constitución histórica, es un magnífico ejemplo de esta corriente y un claro exponente de una ocasión histórica desaprovechada por la cerrazón de Fernando VII y su corte.

Una de las muchas posturas que se defendieron en España durante el proceso de independencia estuvo muy condicionada por la idea de una forma política

histórica que se relacionaba con una modernización de la fundada por los Reyes Católicos como secuela de la monarquía goda y que tomó cuerpo principalmente en Castilla. Otras posturas se dejaron influir por las corrientes francesas o inglesas, por el liberalismo afrancesado, por el constitucionalismo inglés o por el absolutismo monárquico, siendo muchas de las veces muy difícil distinguir a los partidarios de unas u otras ideas, pues todavía no estaban constituidos en partidos políticos tal y como los conocemos hoy. Las ideas se entremezclaban y las opiniones sobre el gobierno, tanto interior como exterior, eran muy dispares.

Gaspar Melchor de Jovellanos fue uno de aquellos hombres que pensaban que en España había una forma histórica de lo político y que las Cortes de Cádiz eran el momento propicio para actualizarla y revigorizarla. La situación de desgobierno en la península y las tensiones en los territorios de ultramar hacían inevitable repensar el gobierno y la administración del imperio. Las tendencias centralizadoras y monopolizadoras del poder chocaban con los intereses de las colonias y con las posturas partidarias de una descentralización de la administración. Tomamos la de Jovellanos por ser un buen representante de un liberalismo histórico, que no fue ni afrancesado ni absolutista, y que intentó entender, aunque tardíamente y de soslayo, el problema americano. Apostó por considerar los territorios americanos como provincias y no como colonias, y por otorgar a los ciudadanos americanos el derecho de representación en Cortes. Su propuesta de reforma constitucional fue una respuesta original a los problemas concretos de su época y el no haberla puesto en marcha por su prematura muerte es, a nuestro juicio, una ocasión histórica perdida.

IV.1. La “Constitución histórica” como doctrina del constitucionalismo político conservador

Las ideas se arraigan en la historia como el tronco de un árbol lo hace en la tierra. No puede haber una cosa sin la otra. Así, para comprender la doctrina de la constitución histórica como la planteó Jovellanos, hay que tener en cuenta la situación tan particular de España durante la Guerra de la Independencia.

La monarquía, por las renunciaciones de Bayona, había perdido su legitimidad y, por tanto, no cabía invocar la legitimidad dinástica como sí pudieron hacer los vecinos franceses en la Restauración (1814-1830) para redactar la *Charte* (1814) y defender a Luis XVIII en el trono. En España la realidad fue muy diferente, pues fue la única nación del período constitucionalista que no se levantó contra el rey para reclamar la soberanía nacional, sino que se levantó contra un gobierno legítimo, y extranjero, para restaurar por la fuerza al monarca. Así, a la hora de legitimar a Fernando VII en el trono, no se podía invocar la teoría del principio monárquico

que, como hemos visto, era propia de la tradición francesa y ajena a la historia española hasta la llegada de los Borbones. Solo eran aplicables las teorías de la soberanía popular, adoptadas por el sector más radical y afrancesado, o la antigua teoría visigoda, formulada por San Isidoro, del poder en manos del pueblo y cedido circunstancialmente al rey. En la época, esta última teoría se conoció como la “constitución histórica” o teoría de las “leyes fundamentales”, y combinaba la legitimación del rey y la limitación de las Cortes constituyentes “a la francesa”.

La teoría más extendida en España sobre la legitimidad del poder sostenía que el poder era concedido por Dios al pueblo y este, mediante un *pactum subjectionis*, se sometía al rey. El pacto tenía una naturaleza contractual y, por tanto, no solo obligaba al pueblo, sino que también obligaba y limitaba al rey. Esta doctrina estaba muy lejos del moderno “derecho divino de los reyes” (Figgis, 1942). Según esta última doctrina, el poder estaba conferido directamente al rey, que tenía un carácter sagrado. Era una doctrina voluntarista de raíz protestante y considerada herética por los teóricos españoles. No obstante, fue adoptada en Inglaterra y Francia, y tuvo consecuencias en España con la modernización del Estado llevada a cabo por los Borbones.

Los liberales “doceañistas” estaban al cabo de estas cuestiones hasta tal punto que se podrían establecer con bastante claridad las distintas familias políticas en función de si la defensa del poder se hacía con base en el derecho divino de los reyes, en la soberanía popular o las leyes fundamentales del reino. Los absolutistas defendían la legitimidad de Fernando VII con la teoría del derecho divino de los reyes y pensaban que la monarquía era de carácter sagrado. Los afrancesados radicales estaban influidos por las teorías contemporáneas de la soberanía popular. Y el tercer grupo, que es el que ahora nos interesa explicar, rechazaba ambas. La primera por negar la primacía popular en el orden del poder y, la segunda, por considerarla, en palabras de Jovellanos, “una herejía”. Este grupo de liberales defendía la constitución histórica de España y negaba absolutamente la existencia misma de un poder constituyente, ya fuese el rey o el pueblo. La constitución era un dato histórico y no un acto de voluntad. Así, según Varela (1994: 48):

“(…) entendían por Constitución, no la suprema norma del ordenamiento, emanada del poder constituyente de la Nación, como sustentarían los revolucionarios franceses de 1789, sino la estructura normativa que resultaba de las leyes fundamentales del Reino. Una legislación tradicional en la que se delimitaba un orden político básico y, en este sentido, constitucional. Se trataba, pues, de un concepto puramente material de Constitución, muy próximo al británico, que no requería la exigencia de unos requisitos formales específicos, como acontece con el concepto moderno, ni entrañaba una connotación

axiológica, como el reconocimiento de los derechos fundamentales y la división de poderes, según exigía el célebre artículo 16 de la Declaración de 1789”.

Jovellanos, uno de los más importantes defensores de la constitución histórica, pensaba que el rey obtenía su poder del pueblo y no de Dios. Por el pacto de sujeción el rey recibía el poder del pueblo y quedaba obligado por las Leyes Fundamentales del Reino. De ahí que para el político asturiano la doctrina de la soberanía popular y, en general, cualquier doctrina que defendiese la existencia de un poder constituyente, podía ser considerada una herejía:

“Y aquí notaré que oigo hablar mucho de hacer en las mismas Cortes una nueva Constitución y aun de ejecutarla, y en esto sí que, a mi juicio, habría mucho inconveniente y peligro. ¿Por ventura no tiene España su Constitución? Tiénela, sin duda, porque ¿qué otra cosa es una Constitución que el conjunto de leyes fundamentales que fijan los derechos del soberano y de los súbditos y los medios saludables para preservar unos y otros? ¿Y quién duda que España tiene esas leyes y las conoce? ¿Hay algunas que el despotismo haya atacado y destruido?, restablézcanse. ¿Falta alguna medida saludable para asegurar la observancia de todas? Establézcanse. Tal será siempre en este punto mi dictamen sin que asienta a otros que so pretexto de reformas traten de alterar la esencia de la Constitución española. Lo contrario no cabe en el poder de Vuestra Majestad, que ha jurado solemnemente observar las leyes fundamentales del reino, ni en los votos de la nación” (Jovellanos, 1858: 46).

El poder del rey derivaba de la nación y, a la vez, estaba limitado por el pacto. Así lo explicaba Jovellanos: “resultará que si la nación así constituida tiene una obligación perpetua de reconocer y obedecer aquel poder, mientras obre según los términos del pacto, tendrá también un derecho perpetuo para contenerlos en aquellos términos” (Jovellanos, *Memoria en defensa de la Junta Central*: 620).

El modo de trasladar la teoría a la práctica sería a través de la rehabilitación de las Cortes, no románticamente, sino adaptadas a las nuevas tendencias constitucionalistas para las que América tendría tanto que ver. El rey y las Cortes compartirían el poder legislativo. El rey no podría legislar sin el consentimiento de la Nación reunida en Cortes, y esta no podría legislar sin el consentimiento de aquel, salvo, como era el caso, estuviese ausente por causa de fuerza mayor. De aquí nacía la justificación de la legitimidad de las Cortes, tanto en la península como en América, pues el rey se entendía que estaba ausente. El problema fue, como se vio

más tarde, que el rey no lo entendió igual y, a su vuelta, consideró nulas todas las decisiones tomadas en su ausencia, pero esto es un capítulo oscuro que conven-
dría tratarse en otro lugar.

IV.2. América es España y España es América

El sentir de buena parte de los españoles de uno y otro lado del Atlántico era que España era una y que debía seguir siéndolo. El descabezamiento de la nación en 1808 produjo que ciertos problemas constitucionales, principalmente el de la convocatoria de las Cortes y su representatividad, diesen lugar a ulteriores movimientos de independencia.

Jovellanos era muy consciente de este drama político y deseaba de todo corazón que España no se deshiciese en un proceso independentista que no beneficiaría a ninguna de las partes. Así, en una carta dirigida a lord Holland, escribía: “la independencia de América dividiría en dos partes la especie humana, armaría para siempre la una contra la otra, y si las guerras de nación a nación son hoy tan horrendas y funestas, ¿qué sería entonces la de media humanidad contra la otra media?” (Jovellanos, 1811). España y América se habían enlazado en la historia en una unidad inescindible que había dado como resultado un país más grande y más fructífero. Jovellanos, no obstante, entendía que las realidades históricas deben reformarse pues, como los cuerpos vivos, degeneran y se regeneran en un continuo cambio. Como el cuerpo va reponiendo las células y los árboles renuevan su follaje, también las formas políticas se renuevan constantemente, pero siempre con el equilibrio de aquello que sabe conservar lo valioso, apostar por lo bueno y eliminar lo que ya no es necesario. Así, había que volver a situar a los territorios de ultramar en el lugar que históricamente les correspondía. Las posturas de un Blanco White, por ejemplo, que afirmaban que ese lugar era la independencia irri-
taban hasta la indignación al polígrafo asturiano:

“Tengo sobre mi corazón la insurrección de América de que usted me habla, y no puedo dejar de detestar y odiar con todo a los que la fomentan. Dícenme que Blanco es uno de sus más ardientes sopladores; yo no he visto siquiera un número de su periódico; pero si es cierto lo que oigo contar de sus discursos, no hallo dictado bastante negro con qué caracterizar su conducta. Fomentar ese fuego en un extraño, fuera imprudencia; en un nacional es una cruel indignidad. No basta para disculparla suponer una cabeza llena de manías y cavilaciones democráticas, porque deben callar los estímulos de la opinión donde hablan los sentimientos de la probidad” (Jovellanos, 1811).

La propuesta jovellanista consistía en considerar a los territorios de ultramar como una provincia más y no como colonias, que es como habían sido tratadas

por las reformas borbónicas. Por tanto, ni independencia, ni colonias. La propuesta intermedia era considerarlas como una provincia más y convocarlas a Cortes. En el “Memorial de Agravios (1809)” se afirma que “América y España son dos partes integrantes y constituyentes de la monarquía española, y bajo este principio y el de sus mutuos y comunes intereses jamás podrá haber un amor sincero y fraterno sino sobre la reciprocidad e igualdad de derechos (...) Tan españoles somos como Don Pelayo”. Jovellanos coincidía con este parecer y era consciente de la necesidad de abrir una tercera vía que garantizase la representación política de los territorios de ultramar, como también lo era, por otro lado, necesario en la propia península. Esta sería una de las batallas de Jovellanos que, debido a su muerte antes de la celebración de las Cortes de Cádiz, no pudo defenderla hasta sus últimas consecuencias.

IV.3. Representación supletoria

Jovellanos fue determinante en el proceso de independencia de los territorios de ultramar. El 30 de diciembre de 1808 moría el presidente de la Junta Central, el conde de Floridablanca, apenas dos meses después de constituida dicha Junta como órgano de gobierno durante la guerra contra los franceses. Una vez determinada la legitimidad de este órgano de gobierno, Jovellanos insistió en la necesidad de convocar Cortes y así se hizo el 22 de enero de 1809. La recién creada Junta Central proclamaba el siguiente decreto convocando a sus Cortes a representantes de los territorios de América:

“El rey nuestro Señor Don Fernando VII y en su real nombre la Junta Suprema Central Gubernativa del Reino, considerando que los vastos y preciosos dominios que España posee en las Indias, no son propiamente Colonias, ó Factorías como los de otras naciones, sino una parte esencial é integrante de la monarquía española, y deseando estrechar de un modo indisoluble los sagrados vínculos que unen unos y otros dominios, como así mismo corresponderá la heroica lealtad y patriotismo de que acaban de dar tan decisiva prueba a la España en la coyuntura más crítica que se ha visto hasta ahora nación alguna, se ha servido declarar, teniendo presente la consulta del Consejo de Indias del 21 de noviembre último, que los reinos, provincias, é islas que forman los referidos dominios deben tener representación nacional inmediata a su real persona, y constituir parte de la Junta Central Gubernativa del Reino por medio de sus correspondientes diputados”.

Por primera vez en la historia el soberano español convocaba a sus Cortes a representantes de los territorios de América y, lo que es aún más relevante, afirmaba que “no son propiamente Colonias, o Factorías como los de otras naciones, sino una parte esencial e integrante de la monarquía española”. Para expertos como

Rafael Herrera “se hace evidente la influencia y la coincidencia absoluta entre la comprensión específica de Jovellanos de la necesidad de integrar a América en el proceso de representación y las decisiones políticas que había tomado la Central a ese respecto” (2010: 87).

Las nuevas tendencias constitucionalistas exigían cambios en la organización y representación del territorio. Hemos visto que los dos grandes modelos en disputa eran el centralista propio del absolutismo francés y, en el otro extremo, el soberanista tendente a la independencia. Jovellanos defendía una tercera vía consistente en adoptar la figura administrativa de las provincias para otorgar la representación debida a todos los territorios de la nación española. Fue un asunto complejo porque exigía adaptar a la constitución histórica de España una figura nueva: nunca antes en la historia el Nuevo Mundo estuvo representado en las Cortes. Es cierto que el riesgo era grande, aún estaban vivas las ascuas de la Revolución Francesa, y suponía reconocer a los territorios de ultramar una personalidad política, asunto negado por los absolutistas y que podría ser aprovechado por Francia e Inglaterra para incentivar la independencia. Jovellanos entendió que era necesario seguir adelante con el proceso, pacificar América fue su último desvelo político (Fernández Sarasola, 2006).

El problema al que se enfrentaron los liberales “conservadores” fue el de encajar las nuevas ideas constitucionalistas en la constitución histórica de España. Las leyes fundamentales del reino rechazaban la misma idea de la soberanía constituyente, ya residiese en el rey o en el pueblo, pues la constitución nacía de la historia y no podía ser creación de nadie. Este era el punto en el que Jovellanos no podía estar de acuerdo con los constitucionalistas modernos, pero sí lo estaba, no obstante, en la idea de otorgar una representación a todo el territorio de la nación en el órgano legislativo que, en este caso, eran las rehabilitadas Cortes en colaboración con el rey (ausente).

En un breve escrito, titulado “Representación supletoria de América”, Jovellanos exponía “un proyecto de Decreto para la elección de diputados de Cortes por representación de las Américas”. En el mismo se trataba de facilitar la representación de los americanos y de solventar el problema de convocar a representantes que residiesen en ultramar dada la premura del tiempo, pues no sería posible que llegasen el 1 de marzo, según estaba prevista su convocatoria. La solución fue buscar un “medio supletorio”. Como explica en la “Exposición sobre la organización de las Cortes”, “el plazo señalado para las que ahora se convocan no era compatible (...) y ocurriose, con todo, a esto por un medio supletorio, y con consejo de sujetos de carácter, bien instruidos en el estado de esta preciosa parte del reino, se elegirán para representarle algunas personas naturales de aquellos países y residentes en este continente” (Jovellanos, 1858: 711).

Lo primero que hizo Jovellanos fue legitimar la representación americana que, si bien no se podía fundamentar en la historia, sí podía hacerlo, como en otras ocasiones se había hecho con otros reinos de España, por sus servicios prestados a la patria. En este caso, los americanos habían luchado con más éxito que los peninsulares contra franceses e ingleses, y se podía entender que esto fuese un mérito suficiente para obtener representación en Cortes. Así lo expresó el político asturiano:

“Cuando los vínculos sociales que unen entre sí a los individuos de un Estado no bastasen para asegurar a nuestros hermanos de América y Asia la igualdad de protección y derechos que gozan los españoles nacidos en este continente, hallarán el más ilustre y firme título para su adquisición en los insignes testimonios con que han acreditado su amor al Rey y a la patria, y en el ardiente entusiasmo y esfuerzos generosos con que han ayudado a defenderlos contra la pérfida invasión del tirano de Europa. Penetrada esta verdad la Suprema Junta Gubernativa de España e Indias, desde el principio de su feliz instalación acordó llamar a los representantes de una y otra India a la participación del ejercicio del poder soberano, y por el real decreto de 22 de enero, declaró, a nombre y en voz de nuestro amado Rey, el señor don Fernando VII, el número de vocales que debían completar el cuerpo augusto a quien la nación había confiado el supremo gobierno del reino”.

El problema de la legitimidad se resolvía con un argumento histórico que, por analogía, se podía aplicar a los territorios de ultramar. El siguiente punto era la composición de las Cortes y la proporción de la representación. La propuesta de decreto establecía, en su artículo primero que “Concurrirán a las próximas Cortes extraordinarias, por representación de las dos Américas, islas de Barlovento y Filipinas, veintiséis diputados que sean naturales de sus provincias, y que tengan las calidades que requiere la instrucción general acordada para las elecciones del reino”.

En una carta a lord Holland, Jovellanos mostraba su preocupación por determinar el número de diputados americanos. Por aquel entonces, los territorios de ultramar tenían más población que los de la península y un reparto proporcional de diputados según la población desequilibraría el poder a favor de América. “¿Aprobaría usted, le pregunta a su amigo lord Holland, que se diese a países tan distantes y poblados, y que cada día lo serán más, que se les diese una representación tan numéricamente superior a la del continente, con indistinta inclusión de las castas? ¿La absoluta exclusión de los continentales para todos los empleos? ¿No pedirían después la traslación del gobierno a aquella parte del mundo?”. La preocupación mostrada por Jovellanos se hacía extensible al resto de liberales del momento y suponía la piedra de toque del nuevo sistema constitucional, pues en

América se miraba con desconfianza esta limitación de diputados (no hay que olvidar que había treinta y seis europeos por nueve americanos).

Cuando el imperio estaba compuesto por reinos, el problema de la representación no se daba, pero al pretender adaptar la nueva realidad política a la constitución histórica, la cuestión de la representación era insoslayable. El miedo a perder el centro político y que se desplazase a “aquella parte del mundo” era real en aquel momento, tan real como el miedo que tenían los americanos de verse ellos mismos ignorados por la fuerza gravitacional de la capital. No hay duda de que este fue el gran obstáculo en el intento de modernización de la monarquía hispánica.

El 15 de octubre de 1810 las Cortes de Cádiz promulgaban un decreto que era fiel en espíritu al proyecto elaborado por Jovellanos. En el mismo se decía:

“Las Cortes generales y extraordinarias confirman y sancionan el inconcuso concepto de que los dominios españoles en ambos hemisferios forman una y la misma Monarquía, una misma y sola Nación y una sola familia, y que por lo mismo los naturales que sean originarios de dichos dominios europeos o ultramarinos, son iguales en derechos a los de esta Península”.

En este punto de la historia debemos detenernos. La aportación de Jovellanos tomó fuerza de ley en este decreto: fue el intento de conciliar la constitución histórica de España con el constitucionalismo moderno y la complejísima realidad histórica del momento. Al final, en el texto de 1812, ya muerto Jovellanos, se impuso el dominio “continental” sofocando aquel impulso original jovellanista que partía de un reconocimiento sincero del protagonismo político que debía tener América. Y así, como lamentaba José Felipe Funes, los hechos dieron la razón a Jovellanos: “España nos ganaba las albricias de que ya no éramos colonos; más no cesaba de atestarnos de mandones, que no lo habían sido; y que venían iniciados en los nuevos misterios de su vacilante y ominosa constitución”.

V. Bibliografía

BRAGUE, Rémi (1995). *La vía romana*. Madrid: Gredos.

DIEZ DEL CORRAL, Luis (1998). OO.CC. Madrid: CEPC: *La imagen de Europa en las utopías americanas de Tocqueville; La experiencia histórica nacional y supranacional de España; Las Indias, la Monarquía católica y europea; Europa frente a América; La estructura de la Monarquía en España y sus consecuencias sobre el proceso autonómico; La experiencia histórica nacional y supranacional de España*, OOC, t. IV, pp. 3239 y ss.

FRANCO, Antonio-Filiu (2011). *Cuba en los orígenes del constitucionalismo español: la alternativa descentralizadora (1808-1837)*. Zaragoza: FGA.

GALLEGO, Elio A. (2016). *Autoridad y razón. Hobbes y la quiebra de la tradición occidental*. Madrid: CEPC.

FERNÁNDEZ SARASOLA, Ignacio (2011). "La organización del poder ejecutivo en España (1808-1810). Reflexiones a partir de un texto inédito de Jovellanos", en: *Hispania*, vol. 71, nº 239. España: Instituto de Historia, Centro de Ciencias Humanas y Sociales, CSIC.

HALPERIN DONGHI, Tulio (2000). "La revolución rioplatense y su contexto americano", en: *Nueva Historia de la Nación Argentina*, T. IV. Argentina: Ed. Planeta.

HERRERA GUILLÉN, RAFAEL (2010). "Jovellanos y América: el temor a un mundo escindido", en: *Araucaria*, vol. 12, nº 23. España: Universidad de Sevilla.

JOVELLANOS, Melchor Gaspar (1858). *Obras Escogidas*, t. 46. Madrid: Biblioteca de Autores Españoles.

MADARIAGA, Salvador de (1959). *El auge del Imperio Español en América*, 2ª ed. Buenos Aires: Editorial Sudamericana, p. 432.

MARTIRÉ, Eduardo (2000). "La crisis de la monarquía española y su marco internacional", en: *Nueva Historia de la Nación Argentina*, t. IV. Buenos Aires: Ed. Planeta.

MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino (2007). *La historia de España*. Madrid: Ciudadela, pp. 94 y 95.

MENÉNDEZ PIDAL, Ramón. *Historia de España*, vol. I. Madrid, p. 54.

NAVARRO GARCÍA, Luis (2012). "Jovellanos y América", en: *Boletín de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras*, nº 40. España: Editorial Universidad de Sevilla.

NEGRO PAVÓN, Dalmacio (2010). *Historia de las formas del Estado*. Madrid: El Buey Mudo.

PIRENNE, Henri (2012). *Historia de Europa: desde las invasiones al S. XVI*. México: FCE.

SCHMITT, Carl (2012). *Catolicismo y forma política*. Madrid: Tecnos.

VARELA SUANZES, Joaquín (1994). “La doctrina de la constitución histórica: de Jovellanos a las Cortes de 1845”, en: *Revista de derecho político*, nº 39. España: Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, p. 48.